



EDUCAR EN DICTADURA **vs** EDUCAR EN DEMOCRACIA

Monografías

3

Destrucción, depuración y censura de libros y bibliotecas escolares

Antonio Viñao Frago



Título monografía

Destrucción, depuración y censura de libros y bibliotecas escolares

© Antonio VIÑAO FRAGO



Fundación CIVES

Calle Vallehermoso, 12, 1º C, 28015 Madrid

cives@fundacioncives.org

91 298 65 55

www.fundacioncives.org

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.

Equipo editorial:

Paulo Cosín Fernández

Carmen Sánchez Mascaraque

Ana Peláez Sanz

© EDICIONES MORATA, S. L. (2025)

Las Rozas (Madrid)

www.edmorata.es

Derechos reservados

Compuesto por: Sagrario Gallego Simón

Destrucción, depuración y censura de libros y bibliotecas escolares

Antonio VIÑAO FRAGO

Índice

A sangre y fuego. Del bibliocausto/bibliocidio a la censura.

Entre la regulación de urgencia, las nuevas estructuras de gobierno y la acción destructivo-depuradora (1936-1939).

Normativa depuradora de un Estado en germen.

Prácticas: de las hogueras a las incautaciones.

Bibliotecas escolares: superposición de disposiciones, organismos y prácticas.

Criterios depuradores y saber pedagógico-educativo.

El adoctrinamiento en acción: nuevos libros, autores y publicaciones.

El discurso franquista sobre la lectura y la relación biblioteca-escuela.

El libro escolar: del texto único (1937-1938) a la censura o autorización previa.

Modelos de política del libro escolar.

Dos intentos fallidos de establecer un texto único (1937-1938).

El régimen de autorización previa: la Comisión dictaminadora de libros de texto (1938-1941).

El Consejo Nacional de Educación como organismo censor (1941-1971).

Un discurso y unas prácticas ultra conservadora-católicas y contradictorias.

Resumen

Desde el mismo comienzo del golpe de Estado contra el gobierno de la República se llevó a cabo, en el bando sublevado, una labor de destrucción, depuración y censura de libros y bibliotecas que ha recibido el nombre de bibliocausto o bibliocidio. Primero, había que destruir a la vez que se producían incautaciones y se iniciaba una política de depuración, expurgo y aislamiento de todo aquello que se consideraba opuesto o no coincidente con los postulados ideológicos del nuevo régimen. Una vez eliminado lo “disolvente”, había que censurar y prohibir, así como imprimir y difundir libros y folletos acordes con dichos postulados. Este texto, expone, prestando especial atención al ámbito escolar, tanto la normativa depuradora del nuevo Estado, como sus prácticas, la labor de adoctrinamiento, el discurso franquista sobre la lectura y las bibliotecas y, por último, el tránsito, en el libro escolar, desde la inicial política del texto único a la censura mediante el sistema de autorización previa.

Palabras clave: bibliocausto/bibliocidio, biblioteca escolar, expurgo, censura, libro escolar.

A sangre y fuego. Del bibliocausto/bibliocidio a la censura

“[...] si en algún Ministerio hay que entrar a sangre y fuego, sin respeto a lo preexistente, es el de I.[nstrucción] P.[ública]”. Así se propone en una nota anónima que figura en el archivo personal de Sainz Rodríguez, ministro de Educación Nacional desde el 31 de enero de 1938 al 27 de abril de 1939, en el primer gobierno franquista y durante fase final de la guerra (Diego Pérez, 1999: 54). Escrita, al parecer, en sus prolegómenos, expresa los dos elementos a destruir y depurar en dicho ministerio: seres humanos (sangre) y libros (fuego). Este trabajo complementa, en este sentido, el dedicado a la depuración del profesorado, para centrarse en la destrucción, expurgo y censura de libros y bibliotecas, en especial en el ámbito escolar.

Extirpar, purificar, borrar, depurar, limpiar, quemar, destruir, purgar, eliminar, liquidar, exterminar, etcétera, son los verbos que mejor definen la labor de los sublevados en la guerra y durante la posterior dictadura en relación con el patrimonio bibliográfico del país.

(Martínez Rus, 2014: 12).

El resultado de esta operación de purificadora ha sido definido como un bibliocausto (Martínez Rus, 2014: 15-39 y 2021) o bibliocidio (Ruiz Bautista, 2015: 43). Ambos términos nos sirven. El fundamento último de la operación era el mismo. Al igual que había —según una determinada concepción y apropiación de la palabra España—, buenos y malos españoles, una España “auténtica” y otra anti-España, había buenos y malos libros e impresos —folletos, prensa diaria, revistas, material didáctico, hojas sueltas, etc.— con ideas “disolventes” de lo que, a su juicio, era y debía ser la ‘verdadera’ España, el partido España.

Nada refleja mejor esta concepción totalitaria, por excluyente, de la nación, del Estado y del término España —fundamento y base de la política del libro en general, y del escolar en particular, durante el franquismo— que la exposición de motivos de la Orden de 21 de septiembre de 1937, “abriendo un concurso para adjudicar un premio de 40.000 pesetas al autor e ilustrador del mejor libro de lectura con destino a las Escuelas primarias”, que, con el título del “Libro de España”, “sea la guía y orientación de la enseñanza patriótica que el Maestro ha de transmitir al alumno”:

“El Libro de España”, ha de ser un compendio atractivo y apologético de todo cuanto de ella deben conocer sus hijos para amarla con vehemencia y lucidez. Su historia, su carácter, sus costumbres; sus Santos, sus Héroes y sus Libros han de desfilar por sus páginas [...]. En la parte histórica ha de atender especialmente a la refutación sencilla y valiente de aquellos pasajes de nuestra Historia que han sido más tenazmente calumniados por la Leyenda Negra; La Unidad social, política y religiosa, forjada por los Reyes Católicos; la España Imperial de Carlos V y Felipe II; la Colonización de América; la Inquisición; la Contra-reforma; las Guerras Carlistas, han de ser entregadas a la nueva generación libres de los absurdos tópicos que la desfiguraban; [...]. Ha de señalar acentuadamente la no interrumpida contribución de España a la civilización universal, y preferentemente, la coincidencia de estos esfuerzos civilizadores con el actual Movimiento en que se prolonga su historia y su grandeza, contraponiendo a la absurda tendencia separatista, la idea excelsa de unión de todas las regiones dentro de la gran Patria Española. Enseñará al niño como características de la Raza que debe admirar e imitar, la Fe Cristiana, la hidalguía caballerosa, la cortesía exquisita, el valor militar, la ponderación de juicio. [...]. Se trata de hacer que los niños del porvenir tomen, definitivamente, partido por España.

Los libros, las bibliotecas, en especial las escolares, y lo impreso en general, habían sido un factor clave en la difusión de ideas “disolventes”: las promotoras del liberalismo parlamentario y el laicismo, de la democracia permisiva de las ideas masónicas, socialistas, comunistas y anarquistas, todas ellas, junto con las anteriores, antipatrióticas y antiespañolas. Como el 29 de octubre de 1933 había

manifestado José Antonio Primo de Rivera en el discurso fundacional de Falange Española, “el más noble destino de todas las urnas” era “ser rotas”. La consecución de este objetivo, agregaba, exigía el recurso a la “dialéctica de los puños y las pistolas”. A estos dos instrumentos pronto habría que añadir el fuego.

La operación purificadora constaría de varias acciones, llevadas a cabo en paralelo o de modo sucesivo. Había, primero, que destruir y extirpar. Al mismo tiempo, depurar y expurgar, eliminando lo malo y peligroso y confinando lo preservable en los “infiernos” —denominación habitual de los lugares reservados en las bibliotecas a los libros solo accesibles con previa y selecta autorización—. Después censurar, prohibir y perseguir la posesión, producción y comercialización de lo prohibido. También establecer, oficial u oficiosamente —en general por publicaciones o clérigos católicos—, listas de buenos y malos libros, de buenas y malas lecturas. Junto con ello, crear editoriales, oficiales u oficiosas, y producir libros, folletos, periódicos, revistas y material impreso acordes con los postulados ideológicos de los sublevados; bien como simple propaganda bélica o posbélica, bien, a partir de 1947 y con escaso éxito, mediante programas de promoción de la lectura a cargo del Servicio Nacional de Lectura.

En este tránsito desde la destrucción y depuración a la censura, la persecución de lo prohibido y la producción propagandística de índole católico-patriótica, nos detendremos primero, en la política general sobre el libro, lo impreso y las bibliotecas, para abordar después la relativa al libro y el material escolares desde los iniciales intentos fallidos de introducir textos únicos por materias hasta el restablecimiento del régimen de autorización previa, con un rígido control sobre los aspectos ideológicos y una detallada reglamentación de los técnico-pedagógicos.

Entre la regulación de urgencia, las nuevas estructuras de gobierno y la acción destructivo-depuradora (1936-1939)

Hay al menos dos modos de acercarse a la operación destructiva, depuradora y censora puesta en marcha desde el comienzo de la sublevación: sus normas reguladoras y la acción práctica. La impresión que se obtiene en uno y otro caso difiere, pero solo en apariencia. Es cierto que las acciones destructivo-depuradoras y censoras preceden en más de un caso a las disposiciones legales que intentan sujetarlas al control de los nuevos organismos del Estado en germen. Ambos aspectos, sin embargo, interactúan entre sí. Las disposiciones irían dictándose conforme se articulaba la organización política en el bando autollamado “nacional”, en función de sus necesidades o urgencias bélicas o políticas.

NORMATIVA DEPURADORA DE UN ESTADO EN GERMEN

En una primera fase, la de la Junta de Defensa Nacional creada el 24 de julio de 1936, al frente de la cual, como jefe de gobierno, se elegiría el 29 de septiembre al general Franco, la producción normativa se reduce, en el ámbito del libro escolar, a dos órdenes de 4 de septiembre de 1936 —una para la segunda enseñanza y otra para la enseñanza primaria—, dictadas con el fin de regular la puesta en marcha del nuevo curso en la zona dominada por los sublevados. En la primera, se encargaba a los rectores y directores de Instituto que “en los libros no haya cosa alguna que se oponga a la moral cristiana, ni a los sanos ideales de ciudadanía y patriotismo”. En la segunda, se precisaba este objetivo. La gestión ministerial, se decía, en especial la de “la Dirección general de Primera Enseñanza”, no había “podido ser más perturbadora para la Infancia” durante el período republicano:

Cubriéndola con un falso amor a la cultura, ha apoyado la publicación de obras de carácter marxista o comunista, con las que ha organizado bibliotecas ambulantes y de las que ha inundado las Escuelas [...]. Es un caso de salud pública hacer desaparecer todas esas publicaciones.

Con tal fin, ordenaba a los gobernadores civiles, alcaldes y delegados gubernativos incautar y destruir “cuantas obras de matiz socialista o comunista se hallen en bibliotecas ambulantes y escuelas”. Y a la Inspección de primera enseñanza, autorizar en las escuelas solo el uso “de obras cuyo contenido responda a los sanos principios de la Religión y la Moral cristiana, y que exalten con sus ejemplos el patriotismo de la niñez”.

Poca cosa en relación con lo que realmente estaba sucediendo allí donde triunfaba el golpe de Estado o iba llegando el ejército franquista. Se ocultaba, además, la amplitud de las publicaciones a destruir y depurar atribuyendo a las bibliotecas ambulantes, populares y escolares —sobre todo a las 5.446 distribuidas por el Patronato de Misiones Pedagógicas (PMP) durante la Segunda República— un contenido muy alejado de su composición real. Estas bibliotecas-tipo, de unos 100 libros, orientadas hacia las personas adultas, el magisterio primario y la infancia, se componían, en síntesis, de una variada selección de obras de la literatura universal —francesa, alemana, rusa, portuguesa, estadounidense, española...— e infantil, de consulta y estudio, agricultura y ganadería, junto con algunas publicaciones de autoría reciente y de la nueva pedagogía. Poco que ver con esa “inundación” escolar de obras socialistas, marxistas y comunistas a la que se aludía en estos primeros documentos legales. En palabras de una estudiosa del tema, las bibliotecas del PMP incluían “no solo obras de todas las épocas históricas, sino también de temas, estilos e ideología variados. La mayor parte de las obras y autores escogidos siguen estando presentes en cualquier antología literaria para uso escolar” (Diego Pérez, 2011: 29).

De inmediato, tras el encumbramiento de Franco, se promulgaría la ley de 1 de octubre de 1936 creando una Junta Técnica de Estado compuesta de varias comisiones responsables de cada uno de los asuntos de gobierno. La Comisión de Cultura y Enseñanza sería presidida formalmente por el poeta y escritor José María Pemán, pero gestionada de hecho, como Vicepresidente, por el catedrático de Pediatría, ideológicamente integrista, Enrique Suñer Ordóñez, autor de *Los intelectuales y la tragedia española* (1937) y verdadero artífice de la depuración del profesorado y de las bibliotecas. El sería quien dijera que se recurriera a la guillotina cuando el 19 de noviembre de 1936 el rectorado de la Universidad de Valladolid preguntara si, en relación con los libros retirados de las bibliotecas depuradas que debían ser destruidos, era preferible guillotinarlos o sumergirlos en agua para convertirlos en pasta de papel; es decir, recurrir a la “decapitación” o al o “ahogamiento” (Andrés de Blas, 2011: 25 y 41).

Sería entonces cuando —mediante dos órdenes de 23 de diciembre de 1936, “declarando ilícitos el comercio y circulación de libros, periódicos, folletos y toda clase de impresos y grabados pornográficos o de literatura disolvente”, y 16 de septiembre de 1937, “sobre la depuración de bibliotecas públicas”— se regulara el sistema de destrucción, expurgo y censura de libros y material impreso en general, sobre todo, del escolar, y se estableciera el procedimiento, desde dicha Comisión de Cultura y Enseñanza, para llevar a cabo la depuración de las bibliotecas y libros e impresos de todo tipo.

La definición de lo considerado ilícito era ya algo más amplia en la primera de dichas órdenes. Seguía siendo, no obstante, insuficiente y vaga: “libros, periódicos, folletos y toda clase de impresos y grabados pornográficos o de literatura socialista, comunista, libertaria y, en general, disolventes”. Sus “dueños” —impresores, editores, libreros...— venían obligados a entregarlos en el plazo de 48 horas para su depósito en las bibliotecas universitarias o provinciales o en el archivo de Hacienda. A su vez, los directores de las bibliotecas oficiales y las corporaciones y entidades poseedoras de este tipo de libros e impresos, debían responsabilizarse de su “conservación y vigilancia” pudiendo ponerlos solo “en manos” de “lectores de reconocida capacidad” por razones científicas.

El procedimiento establecido tuvo que ser reforzado. Dejaba abundantes lagunas y se mostraba ineficaz. La segunda de las órdenes, de 16 de septiembre de 1937, vendría a completarlo y definirlo. Por un lado, los gobernadores civiles elaborarían una lista de “todas las bibliotecas públicas, populares, escolares y salas de lectura de casinos, sociedades, colegios, academias y, en general, en cuantos Centros existan [...] bibliotecas o libros al servicio de cualquier clase de lectores”. De hecho, solo quedaron exentas de la depuración las bibliotecas de seminarios eclesiásticos y de órdenes o congregaciones católicas (Altied Vigil, 1984: 63).

Al mismo tiempo, en cada distrito universitario se constituiría una Comisión depuradora de todos los “Centros de lectura” mencionados, encargada de

solicitar a sus responsables “un índice o fichero” de todos sus “libros, folletos, revistas y publicaciones de toda índole” y, a la vista de los mismo, ordenar “la retirada” de los que contuvieren “ideas disolventes, conceptos inmorales, propaganda de ideas marxistas y todo cuanto signifique falta de respeto a la dignidad de nuestro glorioso Ejército, atentados a la unidad de la Patria, menosprecio de la Religión Católica y de cuanto se oponga al significado y fines de nuestra Cruzada Nacional”. Por último, una vez recibidas en la Comisión de Cultura y Enseñanza las listas de las comisiones depuradoras de distrito, dicha Comisión procedería a clasificar en tres categorías las publicaciones que en ellas figuraban:

- a. “Obras pornográficas de carácter vulgar sin ningún mérito literario”.
- b. “Publicaciones destinadas a propaganda revolucionaria o a la difusión de ideas subversivas sin contenido ideológico de valor esencial”.
- c. “Libros y folletos con mérito literario o científico que, por su contenido ideológico, puedan resultar nocivos para lectores ingenuos o no suficientemente preparados para la lectura de los mismos”.

Las publicaciones de los dos primeros grupos debían ser destruidas. Las del tercero, guardadas en “lugar no visible ni de fácil acceso al público”, solo podrían ser “utilizadas” por quienes poseyeren un “permiso especial” para ello. Estos lugares, habituales en todas las bibliotecas públicas y en la casi totalidad de las de asociaciones o entidades privadas, subsistirían durante toda la dictadura habiendo llegado en algún caso, como fondo bibliográfico especial, a nuestros días.

Poco o nada haría la Comisión de Cultura y Enseñanza con las listas recibidas. La creación, en enero de 1938, del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el primer gobierno de estructura ministerial, y, en el seno del mismo, en marzo de dicho año, del Servicio de Archivos y Bibliotecas a cargo del Facultativo de Archivos y Bibliotecas, Javier Lasso de la Vega, supondría la asunción por este cuerpo funcional y por dicho Servicio de la tarea de completar la labor de las juntas depuradoras de distrito. Con tal fin una Orden de 17 de agosto de 1938 establecía que todas las bibliotecas no servidas por funcionarios de dicho cuerpo debían enviar las obras que hubieren considerado peligrosas, de acuerdo con los criterios de la Orden de 16 de septiembre de 1937, a bibliotecas públicas —universitarias, provinciales...— donde se formaría con ellas una “sección especial de obras reservadas” no accesible al público.

PRÁCTICAS: DE LAS HOGUERAS A LAS INCAUTACIONES

Al igual que la censura previa de libros y otro material impreso estuvo desde el comienzo de la sublevación en manos de las autoridades militares, fueron estas y, desde el punto de vista de la acción, las milicias falangistas, los

mismos soldados, sus jefes inmediatos, la guardia civil, las autoridades locales, los párrocos o algún maestro deseoso de mostrar su adhesión al bando “nacional”, quienes desde el primer momento llevaron a cabo la depuración de bibliotecas y libros. Unas veces por iniciativa y criterio propios, y otras siguiendo instrucciones de la autoridad militar, rectores de universidad y gobernadores civiles, interpretadas a su modo y manera y en función de sus conocimientos, ideas o circunstancias. Así, no sería extraño enviar a la hoguera o considerar “disolventes” las publicaciones que llevaran, sin más, el sello del PMP, todo lo escrito en catalán, las obras de escritores rusos, o decidir del destino de un libro en función del título —para desgracia de *La república* de Platón—, o del autor —Blasco Ibáñez, Galdós, Baroja, Zola...— sin conocer la obra.

Ello daría lugar a una amplia diversidad de situaciones y prácticas. Frente a la lentitud propia del proceso de configuración de toda una serie de organismos, estructuras y disposiciones legales de un Estado en germen, la situación bélica originada por el inicial fracaso y estabilización del golpe y las reacomodaciones y conflictos entre los distintos grupos que participaban en la sublevación —militares y políticos de distintos partidos; falangistas y miembros de organizaciones y asociaciones católicas...—, la realidad ofrece un dinamismo en apariencia caótico, pero efectivo y fulminante.

El triunfo de la sublevación, o la llegada a una población determinada del ejército sublevado, suponía la incautación por el Servicio de Recuperación de Documentos de todo tipo de libros, folletos y papeles relativos a personas físicas o jurídicas, empresas —imprentas, editoriales y librerías—, partidos, sindicatos y asociaciones no adheridas al golpe, que pudieran ser utilizados en los expedientes de depuración, consejos de guerra y peticiones de antecedentes político o que, sin más, debieran ser depurados y expurgados.

Los mismos jefes militares y gubernativos dictaron ya en los primeros días instrucciones al respecto. El general Queipo de Llano lanzaba desde Sevilla, el 4 de septiembre de 1936, un bando similar a la que después sería la mencionada orden de 23 de diciembre de ese mismo año, dando así cobertura al asalto, saqueo, destrucción e incautación de libros y bibliotecas por falangistas y la guardia civil en varias poblaciones andaluzas. El 7 de diciembre el gobierno civil de Navarra ordenaría asimismo la destrucción de libros, periódicos y folletos “antipatrióticos, sectarios, inmorales, heréticos y pornográficos”. Bibliotecas de ateneos y sociedades de recreo, entidades de toda índole, de particulares y las llamadas “populares” fueron saqueadas e incautadas o expurgadas por sus mismos propietarios, ante el temor de que pudieran ser utilizadas como prueba inculpatória.

Las hogueras, el “fuego bibliocida” (Ruiz Bautista, 2015: 43), devinieron un espectáculo, entre la ceremonia y el ritual, allí donde se imponía el golpe de Estado o llegaban el ejército o milicias de los sublevados. La de A Coruña, en agosto de 1936, sería novelada setenta años más tarde por Manuel Rivas en

Os libros arden mal (figuras 3.1 y 3.2). Hogueras similares arderían en Mallorca, Tolosa, Córdoba y Vigo, entre otros lugares, tras el saqueo de una biblioteca determinada o como un rito integrado en algún evento patriótico-religioso. Un acto de este tipo, recogido con el título de “Auto de fe en la Universidad Central” por el periódico *Ya* el 2 de mayo 1939, se celebraría, recién terminada la guerra, en la Ciudad Universitaria madrileña, organizado por el falangista Sindicato Español Universitario para celebrar la Fiesta del Libro (figura 3.3). En el discurso pronunciado con tal motivo por Antonio Luna, catedrático de Derecho y primer juez instructor nombrado para la Comisión depuradora del profesorado universitario, decía que:

“Para edificar a España una, grande y libre, condenamos al fuego los libros separatistas, los liberales, los marxistas, los de la leyenda negra, los anticatólicos, los del romanticismo enfermizo, los pesimistas, los pornográficos, los de un modernismo extravagante, los cursis, los cobardes, los seudocientíficos, los textos malos y los periódicos chabacanos. E incluimos en nuestro índice a Sabino Arana, Juan Jacobo Rousseau, Carlos Marx, Voltaire, Lamartine, Máximo Gorki, Remarque, Freud y *Heraldo de Madrid*”. Prendido el fuego al sucio montón de papeles, mientras las llamas subían al cielo con alegre y purificador chisporroteo, la juventud universitaria, brazo en alto, cantó con ardimiento y valentía el himno *Cara al Sol*.

(Martínez Rus, 2014: 15-16).



Figura 3.1. Manuel Rivas, *Os libros arden mal*, Vigo, Edicións Xerais, 2006. Cubierta.



Figura 3.2. Quema de libros en la dársena de La Coruña el 19 de agosto de 1936 (Martínez Rus, 2021: 27).



Figura 3.3. *Quema de libros en el patio de la Universidad Central para celebrar el día del libro de 1939 (Martínez Rus, 2021: 17).*

BIBLIOTECAS ESCOLARES: SUPERPOSICIÓN DE DISPOSICIONES, ORGANISMOS Y PRÁCTICAS

Que las bibliotecas escolares fueron objeto de una especial acción represiva es algo en lo que muestran su acuerdo quienes han estudiado la depuración de libros y bibliotecas llevada a cabo en el bando franquista. Además, su depuración constituye “un caso paradigmático de represión cultural” (Andrés de Blas, 2011) que ejemplifica lo dicho sobre el proceso purificador. En efecto, la depuración de las bibliotecas escolares ofrece, de modo más acentuado que en el de la generalidad de las bibliotecas y libros, un proceso caótico, no lineal, tortuoso “que avanza a base de superposiciones legislativas” y de “organismos, de fallos y rectificaciones”, de “hechos consumados”, “anticipaciones normativas” e iniciativas aisladas, que al final confluyen en el propósito inicial: la depuración, expurgo, destrucción o envío a los “infiernos” de sus fondos, con especial atención a los procedentes del PMP (Andrés de Blas, 2011: 6).

Ya en agosto de 1936, sin esperar a la publicación de la Orden de 4 de septiembre que inicia legalmente el proceso depurador de libros y bibliotecas, en las provincias controladas por los sublevados se dirigen circulares o instrucciones a las autoridades locales y al magisterio primario —por iniciativa la Inspección de primaria, los militarizados gobiernos civiles, la Junta Superior de Educación de Navarra o el rectorado de Zaragoza— para que, con la colaboración de los párrocos, procedan a retirar todas las obras enviadas a las escuelas por el Ministerio de Instrucción Pública, a cerrar las bibliotecas escolares y enviar listados de sus

fondos. Indicándose incluso en algún caso, como en León, qué autores u obras se consideraban “deleznables”. Todo indica, como señala Andrés de Blas (2011: 8), que existía, entre los sublevados, un estado de prevención o alarma ante los envíos efectuados a las escuelas por el PMP.

La aplicación de la Orden de 4 de septiembre de 1936, que vino a dar cobertura legal a estas acciones previas, ofrece asimismo una cierta heterogeneidad en relación con los listados a enviar, los criterios a seguir y las situaciones de hecho. Algunas bibliotecas habían sido clausuradas sin más; en otras, sus fondos habían sido en buena parte destruidos o habían desaparecido y sus locales se habían destinado al alojamiento de las tropas. El “ritmo de las actuaciones”, en suma, sería “realizado en ‘oleadas sucesivas’, en un cribado cada vez más fino, hasta despojar a las bibliotecas de cualquier contenido considerado, a la sazón, heterodoxo” (Andrés de Blas, 2011: 12).

La promulgación de la ya mencionada Orden de 16 de septiembre de 1937, creando las Comisiones depuradoras de distrito, supondría el remate legal del proceso depurador y su práctica culminación, aunque de hecho la Comisión de Cultura y Enseñanza se limitara a dar por buenos los listados que iban llegando. Puede decirse que en las zonas controladas por el bando sublevado dicho proceso finalizaría a lo largo de 1938 bajo la fiscalización del Servicio de Archivos y Bibliotecas del nuevo MEN. El 10 de agosto de 1938, el responsable de dicho Servicio, Lasso de la Vega, dirigía un oficio-carta al ministro del Interior, Serrano Suñer, para que desde la Jefatura de Propaganda y Prensa se enviaran libros con destino a las bibliotecas públicas. En ella decía haberse retirado

ya cuantos libros se han considerado contrarios a la noble ideología en que se inspira nuestro glorioso movimiento y se hace naturalmente indispensable proceder a sustituir la citada literatura con aquella otra que ha de contribuir en la máxima medida a renovar la mente y a crear el tipo de hombre que ha de crear el Estado Nuevo.
(Andrés de Blas, 2011: 20).

CRITERIOS DEPURADORES Y SABER PEDAGÓGICO-EDUCATIVO

Los criterios establecidos legalmente para decidir si una publicación debía ser destruida o conservada y accesible solo con un permiso especial, solían ser de índole general prestándose a interpretaciones más o menos restrictivas. Algunas instrucciones dictadas en aplicación o al margen de las citadas órdenes de septiembre de 1936 y 1937, incluso de la Orden del MEN de 17 de agosto de 1938 que ponía el proceso depurador en manos del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, así como aclaraciones posteriores, amplían y concretan los criterios efectivamente seguidos. Su aplicación en el campo del saber pedagógico

permite, además, conocer las repercusiones de la depuración en la formación del magisterio primario.

Así, junto a los habituales criterios a tener en cuenta en la depuración de los fondos de las bibliotecas y escuelas —los contrarios a la Iglesia y religión católicas; los de índole liberal-democrática, socialista, comunista, anarquista y masónica; los opuestos a la unidad de la patria—, el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en una circular de 21 de octubre de 1936, añadía un instrumento de consulta obligada que evitaba las dudas o interpretaciones erróneas: todo lo consignado en el Índice de libros prohibidos de la Iglesia católica.

Además, las prohibiciones generales fueron acompañadas en ocasiones de referencias o listas de autores prohibidos. Así, la ocupación de Barcelona por el ejército franquista en enero de 1939 motivó el envío a los libreros de una circular de la Cámara Oficial del Libro de la ciudad en la que a la habitual lista de ideologías o creencias a perseguir se añadían las teosóficas y ocultistas, los de divulgación sexual, las antibelicistas y antifascistas, las que atacaren países amigos —Alemania, Italia— y las de autores “enemigos del nuevo Régimen”, así como una lista de “autores prohibidos”. En conjunto, “más de la mitad de las obras en venta y de los catálogos de las editoriales” existentes (Martínez Rus, 2014: 55).

El alcance de la depuración y la interpretación maximalista que se hizo de las prohibiciones generales o específicas de obras y autores, se evidencia cuando pasamos a dar cuenta de los autores eliminados de algunas bibliotecas escolares tal y como, en el caso de Palencia, ha hecho Diego Pérez (2011: 24-27). No parece sino que, en más de un caso, el temor a quedarse corto y parecer poco entusiasta del golpe y del nuevo Estado hiciera que, ante la ignorancia o la duda, se optara por la eliminación o retirada de la obra: entre los españoles clásicos, contemporáneos o en aquel momento vivos, Fernando de Rojas, Quevedo, Espronceda, Larra, Bécquer, Valera, Blasco Ibáñez, Galdós, Marañón, Ortega, Altamira, Palacio Valdés, Azorín, Pérez de Ayala, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Valle Inclán, Baroja, Miró, Pardo Bazán y Carmen de Burgos, entre otros. Del mundo clásico, Sófocles, Homero y Apuleyo. En el ámbito de la literatura universal, los más castigados fueron los autores rusos, en especial Tolstoi, y franceses, sobre todo Hugo, Zola y Balzac. Y en el de la literatura infantil y juvenil, nada más y nada menos que Andersen, Dickens, Grimm, Barrie y Beecher Stowe.

La mera lectura de la relación anterior ahorra comentarios, aunque volvamos sobre ella al hablar de la interacción biblioteca-escuela en la dictadura franquista. Pero sí hay un autor —Rodolfo Llopis— y una obra —las *Lecturas históricas* de Albert Thomas (figura 3.4)—que exigen una referencia por sí misma y por lo que significa en relación con los autores y obras más representativas de ese período de renovación y apertura al exterior de la pedagogía y de la educación que tuvo lugar en la España del primer tercio del siglo xx.

En 1937 la Inspección de enseñanza primaria de Zaragoza advertía a los maestros que tenían que llevar a cabo la depuración de la biblioteca escolar, que miraran

con especial prevención aquellas producciones escritas o traducidas por el odioso Llopis y por los que secundaban sus siniestros planes en la Inspección Central y en las covachuelas de la Institución Libre de Enseñanza, principal causante de la tragedia que se ha cernido sobre nuestra querida España.

(Diego Pérez, 2011: 21).

La alusión a las obras traducidas por Rodolfo Llopis no era inocua. Se refería a la traducción y adaptación a España, con la adición de tres capítulos, del libro del primer presidente de la Organización Internacional del Trabajo, Albert Thomas, *Lecturas históricas. Historia anecdótica del trabajo*, publicado en 1930 (figura 3.4), que, en efecto, figuraba en un buen número de bibliotecas escolares, gracias a los envíos del PMP. Prohibido en 1935 como libro de escolar de lectura, tras una queja del diputado Romualdo de Toledo, sería autorizado de nuevo con el triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936 y definitivamente proscrito en el bando rebelde al figurar en la lista de libros prohibidos, de 17 de agosto de 1938, elaborada por el Servicio Nacional de Primera Enseñanza, bajo la jefatura de Romualdo de Toledo (Diego Pérez, 2011: 25-26).

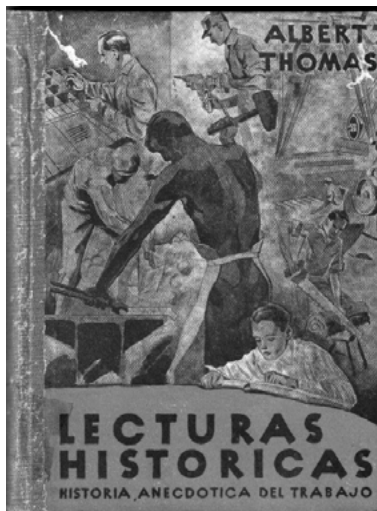


Figura 3.4. Albert Thomas, *Lecturas históricas. Historia anecdótica del trabajo*. Madrid, Juan Ortiz, s.a. Adaptación española y traducción de Rodolfo Llopis. Cubierta.

Rodolfo Llopis, profesor de escuelas normales y exdirector general de primera enseñanza, era autor así mismo de diversas obras pedagógico-didácticas,

pero solo era uno más, y no el más relevante, entre la pléyade de exprofesores de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, profesores de las secciones de Pedagogía de las universidades de Madrid y Barcelona y, sobre todo, inspectores de enseñanza primaria, profesores de escuelas normales, directores de escuelas graduadas y miembros del magisterio primario, cuyos libros serían destruidos, retirados o prohibidos.

Solo un día después, el 18 de agosto, de que se firmara la mencionada Orden de 17 de agosto de 1938, que ponía en manos del cuerpo de archiveros y bibliotecarios la depuración de las bibliotecas, Romualdo de Toledo —que ya en las cortes republicanas se había distinguido por sus ataques a las bibliotecas del PMP— enviaba una circular desde el Servicio Nacional de Enseñanza Primaria con una lista de obras y autores prohibidos. Aunque daba por hecho que la labor de depuración había surtido efecto, todavía había libros, decía —y no andaba equivocado—, que “solo por morbosa inercia podían figurar en las estanterías de las bibliotecas escolares”. Sobre todo, aquellos escritos por “autores declaradamente enemigos del Glorioso Movimiento Nacional, que actualmente ostentan cargos y desempeñan función de confianza a las órdenes del soviet de Barcelona”: Ángel Llorca (8 libros prohibidos), Aurelio Rodríguez Charentón (6), Santiago Hernández Ruiz (5), Luis Huertas y Gerardo Rodríguez (4), Lorenzo Luzuriaga (3), Modesto Bargalló, Benigno Ferrer, Gervasio Manrique, Heliodoro Carpintero, Enrique Rioja y Rodolfo Llopis (2) y Alejandro Rodríguez (Casona), Miguel Santaló, Margarita Comas, Antonio Zulueta, Gloria Giner de los Ríos, Elisa López Velasco, José Briones, Eladio García, Modesto Medina, Vicente Valls, Berna Salido, Manuel Alonso Zapata, Antonio Jaén, Sánchez y Sabrás, Luis Sánchez Trincado, Fermín González, J. Ortiz, Fernando Sáinz, Daniel G. Linacero, Manuel G. Linacero, Virgilio Hueso, y Pablo Andrés de los Cobos (1) (Dueñas Díez y Grimau Martínez, 2004: 322-323).

Poco importa que dicha relación fuera errónea e incompleta. Ni figuraban en ella todos los que podían haber figurado, ni todos los que figuraban ocupaban cargos o puestos de confianza en el gobierno republicano. Tampoco la relación agota a quienes en la España del primer tercio del siglo xx contribuyeron desde las aulas, o con sus intervenciones y escritos, a la renovación de las prácticas y del conocimiento científico en el campo de la educación. Por de pronto, habría que añadir a cuantos, sin figurar en ella, habían colaborado con artículos en la *Revista de Pedagogía*, creada en 1922 bajo la dirección de Lorenzo Luzuriaga, o con libros en sus publicaciones como editorial (Viñao Frago, 1994-95), o en otras revistas y editoriales no menos conocidas: Herminio Almendros, Antonio Ballesteros, Juan Bardina, Domingo Barnés, Juan Comas, Dionisio Correas, Manuel Bartolomé Cossío, Federico Doreste, Félix Martí Alpera, Agustín Nogués, Jacobo Orellana, Sidonio Pintado, Fernando Sainz, María Sánchez Arbós, Domingo Tirado Benedí, Joaquín Xirau, Luis de Zulueta o Rodolfo Tomás y Samper, entre otros.

Las consecuencias de esta política depuradora se mantendrían —por lo que a la formación de profesorado y el saber pedagógico se refiere— a lo largo de la dictadura franquista. La depuración de las obras de dichos autores —y de otros fallecidos con anterioridad a la guerra civil y de orientación institucionista (relativa a la Institución Libre de Enseñanza), republicana o socialista— fue, en efecto, mucho más allá de los libros escolares. De hecho, basta comparar la producción pedagógica, en libros y revistas, de los años cuarenta, cincuenta e incluso buena parte de los sesenta del siglo xx con la de los años veinte y treinta de ese mismo siglo, así como los autores más leídos y citados, para advertir la pobreza y mentalidad restrictiva de los primeros en comparación con la apertura mental, amplitud de miras y sentido de la relación entre teoría y práctica, de los segundos.

La ruptura —silencio, olvido, ostracismo intelectual y social— con esta tradición escolar y pedagógica renovadora sería casi absoluta. De ahí que, cuando en los años setenta y ochenta del siglo pasado, surgieran y se desarrollaran los movimientos de renovación pedagógica lo hicieran en general, salvo en el caso de Cataluña, ignorando una tradición y unas raíces que explican en parte su debilidad posterior. Incluso hoy, muchos de los autores, obras y revistas didáctico-pedagógicas, de orientación renovadora y abierta a lo que estaba sucediendo fuera de nuestras fronteras en el primer tercio del siglo xx, siguen siendo unas auténticas desconocidas —salvo por los especialistas del tema—, por la casi totalidad de quienes, desde el campo de la educación, desconociendo las raíces de su propia tradición, podrían considerarse, sin problema alguno, sus herederos.

Tras la guerra esta sería la versión, por lo que a la educación durante el periodo republicano se refiere, que tendrían que memorizar y reproducir en exámenes y oposiciones quienes pretendiesen acceder al magisterio primario:

España sufrió tan lamentable calamidad [el ateísmo pedagógico] durante el régimen republicano. La incubó una larga etapa preparatoria, a cargo de la Institución libre de enseñanza, con hábil táctica y tesón perseverante. [...]. Los hombres de la Institución libre de enseñanza, estratégicamente situados con el apoyo suicida de la política republicana, que quiso imponer el laicismo, la coeducación y la escuela única, novedades calcadas en moldes extranjeros, contrarias a nuestras creencias, a nuestro temperamento y a nuestra tradición.

[...] El movimiento mundial denominado educación nueva se apoya sobre postulados semejantes a los que ofreció a España la República de 1931.

(Montilla, 1952: 233-234).

La autora de estos párrafos, que resumían para los futuros maestros y maestras la educación durante la Segunda República, había sido responsable, como inspectora-jefe de enseñanza primaria, de la depuración de las bibliotecas

escolares en Córdoba durante la guerra. En cuanto al libro del que proceden, *La educación y su historia*, fue uno de los más utilizados en las Escuelas Normales o del Magisterio durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Alcanzaría su séptima edición en 1964 sin que dichos párrafos experimentaran cambio alguno.

Nuestra tradición, la auténticamente española, sería para estas futuras generaciones de maestras y maestros, la de un Lulio y un Vives irreconocibles, la de los fundadores de órdenes o congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza — José de Calasanz, designado patrono del magisterio primario, Juan Bosco — y, entre los más cercanos en el tiempo, pedagogos católicos como Andrés Manjón, Manuel Siurot, Ramón Ruiz Amado, Pedro Poveda y Rufino Blanco. Estos serían los que ocuparían, como ejemplos a seguir, la mayor parte de las páginas de las historias de la educación durante años y años. Otros, como Locke, Rousseau y Pestalozzi, junto con la práctica totalidad del movimiento internacional de la Escuela Nueva y la larga relación anterior de renovadores de la educación, de la pedagogía y de la didáctica, sobre todo de las didácticas específicas, serían enviados, en el mejor de los casos, a los “infiernos”, y tratados, cuando no ninguneados o minusvalorados, como perversos corruptores de la infancia.

El efecto de las medidas destructivo-depuradoras sobre los libros de uso escolar escritos por dichos docentes y pedagogos renovadores quedaría de manifiesto cuando, en 1954, el Instituto “San José de Calasanz” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas publicara una obra de Francisca Montilla con los resultados de una encuesta, dirigida al magisterio primario, directores de graduadas e inspectores, sobre cuáles eran, a su juicio, los libros de uso escolar preferidos, y qué libro de lectura estimaban más apropiado por su “valor educativo, instructivo y literario”. De toda esa serie de autores “malditos” con obras prohibidas solo quedaban cuatro y, desde luego, relegados a los últimos lugares: Martí Alpera con cinco obras, Hernández Ruiz con dos, y Almendros y Rodríguez Charenton con una. Suficiente, pese a los retoques introducidos en los libros anteriores a 1936, con el fin de que pudieran ser autorizados, para que Montilla (1954: 28) dijera que en ellos no había desaparecido “totalmente” el “matiz” propio del “nefasto período laicista”.

El adoctrinamiento en acción: nuevos libros, autores y publicaciones

La depuración y prohibición de determinados autores y obras, su desaparición de las bibliotecas escolares y de la enseñanza, tenía que ser suplida por nuevas publicaciones acordes con los supuestos ideológicos en los que se

sustentaba el golpe y se configuraban el nuevo Estado y el régimen dictatorial. Al igual que, desde un punto de vista general, surgiría toda una producción editorial al servicio de la “Cruzada” y los catálogos comerciales irían poblándose de “héroes y santos”, de libros patriótico-españolistas y religioso-católicos (Martínez Rus, 2014: 93-98 y 175-191), sería en el ámbito escolar donde dicha producción alcanzaría mayor intensidad y donde se mantendría mucho más allá de la guerra y la posguerra.

Por de pronto, la acción depuradora-destructiva de las bibliotecas escolares sería contrarrestada en un primer momento por actuaciones aisladas como la llevada a cabo en diciembre de 1936 por la Comisión depuradora de bibliotecas de León al enviar a las escuelas una relación de las 82 obras que podían adquirir los maestros: las 18 primeras eran de índole catequística y religioso-católica y el resto manuales de uso escolar (Represura. Documento nº 1) Sería, no obstante, en junio de 1939 cuando en el seno del MEN se crearía el Patronato de Cultura Popular con el fin, se decía, de contrarrestar

la labor nefasta por antinacional, atea, marxista y extranjerizante que había ejercido sobre los pueblos el Patronato de Misiones Pedagógicas y llevar a todos los pueblos de España el espíritu del Glorioso Movimiento Nacional, haciéndoles sentir la unidad, así como la disciplina y lealtad al caudillo.

(Rodrigo Echalecu, 2015: 147).

Durante sus dos primeros años, el Patronato enviaría a las escuelas unas 1.546 bibliotecas acordes con dicha finalidad: libros religioso-católicos, obras ensalzadoras del “glorioso alzamiento”, de orientación católica familiar y organización del hogar para las alumnas y, en la sección de Historia, libros católico-españolistas, además de algunos libros de viajes y descubrimientos, obras científicas, de orientación profesional, pasatiempos, las obras del cardenal Gomá y escasas publicaciones de autores extranjeros (Rodrigo Echalecu, 2015: 147-148).

Los criterios de la censura y selección de las lecturas y libros escolares tendrían un carácter proselitista, totalitario y ultracatólico. Serían, como decía Francisca Montilla (1954: 27-31), religioso-morales, científicos y literarios. Los primeros eran fundamentales: afectaban “a todos los libros sin excepción”; ninguna “disciplina” estaba “libre de influencias religiosas”. Ello excluía, incluso, el libro de “formas ecuanímes y templadas”, indiferente, que callara la verdad o la empuqueñeciera cayendo en el “pecado de omisión”. La primera pregunta que el censor debía hacerse era si el libro estaba “todo él inspirado”, o no, “en un ideal formativo francamente religioso” —por supuesto, católico-integrista—, si estaba informado, o no, de “un sano proselitismo”, de “cálida inspiración apostólica”.

Ello repercutía en los criterios científicos. Solo debía contener, decía Montilla, “verdades científicas” con una “visión del mundo, de la vida y de los hechos”

que enraizara “más y más en la concepción religiosa” —o sea, católico-integrista— “que debe informar la existencia entera”. En consecuencia, en los libros científicos no debían “aparecer hipótesis aún sin confirmar”, “doctrinas capaces de inducir al error, aunque ellas mismas no sean erróneas” o “controversias”.

En cuanto al fondo o contenido, “merecen la mejor acogida”, continuaba diciendo, “los libros que fomentan [...] lo heroico, lo noble, lo santo, lo excelente. Biografías, gestas heroicas: exaltación de la Religión y de la Patria”.

Con tales criterios de censura y selección de libros escolares nada tienen de extraño los resultados publicados en 1954 de la ya mencionada encuesta llevada a cabo desde el Consejo Superior de Investigaciones científicas por Francisca Montilla.

El más votado, auténtico *best seller* en su época, sería *Glorias imperiales* (figura 3.5), publicado en 1940 y escrito por Luis Ortiz, catedrático de Latín, director del Instituto “Ramiro de Maeztu” de 1940 a 1975, procurador en las Cortes franquistas y promotor, junto con el cardenal Gomá y el ministro Ibáñez Martín, de la conocida estatua ecuestre del dictador que se instaló frente a la entrada de dicho Instituto. El libro contó “con el beneplácito oficial y fue repartido generosamente, entre 1940 y 1943, por el Patronato de Cultura Popular (MEN), para sustituir los fondos de las bibliotecas escolares” (Diego Pérez, 1998, p. 233).

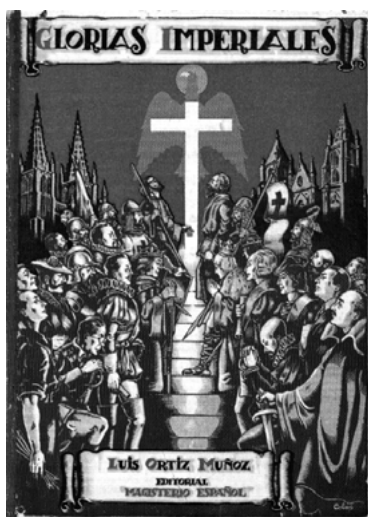


Figura 3.5. Luis Ortiz, *Glorias imperiales*, Libro escolar de lecturas históricas. Madrid, Editorial Magisterio Español, t. I, s.a., pero 1940, y t. II, 4ª edición, s.a. Cubiertas.

La mera transcripción de los títulos de los capítulos de sus dos tomos, resume el contenido:

- Tomo I (“Desde el pilar de la raza hasta la Cruz en la Alhambra”): “Aurora del Imperio de España”, “La primera jornada imperial” y “Por España, la Europa medieval fue cristiana”.
- Tomo II (“El gran Imperio de la Hispanidad”): “El nacimiento del Nuevo Mundo”, “La majestad de nuestros monarcas”, “La gloria militar del Imperio”, “España en todos los continentes”, “El Imperio fue para la Cruz”, “El fulgor de las letras, las ciencias y las artes” y “El más alto destino”.

Así lo comentaba Montilla (1954: 70):

Todas estas partes destacan el destino providencial que Dios ha fijado a España y la fidelidad con la que lo ha sabido cumplir. Destino que no se encierra en los límites del territorio nacional, sino que se vierte espléndido sobre el universo entero, descubriendo continentes, evangelizando pueblos, salvando civilizaciones, forjando figuras eminentes cuya influencia recogió admirado el mundo.

La lista de los veinte primeros libros preferidos por el magisterio primario, directores de graduadas e inspectores, dejando a un lado el inevitable *Quijote* —en edulcorada versión escolar— y alguna que otra cartilla, incluye títulos propios de lo que se ha dado en llamar nacional-catolicismo a lo que en realidad era un totalitarismo católico-españolista henchido de delirios imperiales en un país destrozado, empobrecido y amordazado. Junto a los de índole católica, en su versión ultraconservadora (*Cristo es la Verdad*, *Hemos visto al Señor*, *Un regalo de Dios*, todos ellos del inspector Agustín Serrano de Haro, autor preferido por Montilla), la relación incluía una serie de libros católico-patrióticos con títulos tales como el ya mencionado *Glorias imperiales*, junto a otros como *España es así* y *Yo soy español* también de Serrano de Haro, *Santos españoles*, *Símbolos de España*, *España, mi patria*, *Héroes* o *Cien figuras españolas*, entre otros.

El discurso franquista sobre la lectura y la relación biblioteca-escuela

Frente al discurso sobre la lectura y las bibliotecas del período republicano basado en su concepción como un servicio público a fomentar y extender, abierto a todos, laico y gratuito, sin censuras previas, restricciones o recelos, el discurso de los sublevados y del nuevo Estado sería restrictivo, clasista-dual —no todo debía ser puesto al alcance de todos, sobre todo del pueblo llano o de la “gente sin formación”—, moral y técnicamente conducido o reconducido

si fuere necesario, y sobre todo —por influencia del tradicional discurso católico— considerado como un mundo lleno de peligros y asechanzas, necesitado de censura previa, en especial si se trataba de algo publicado en el extranjero. De ahí que los bibliotecarios devinieran “sospechosos habituales”, los editores o libreros “sospechosos ocasionales” y los escritores y periodistas “sospechosos profesionales” (Martínez Rus, 2014: 99-174). En 1938, Juan Vicéns (2002: 55), uno de los responsables de la política bibliotecaria republicana, escribía:

recientemente he podido tener noticia de algunas bibliotecas que actualmente se encuentran en zona rebelde: la historia es simple, siempre la misma: el bibliotecario es fusilado, los libros quemados y todos los que han participado en su organización son fusilados o perseguidos.

En el marco de este discurso marcado por la censura, el recelo y la restricción, ¿qué tipo de relación se estableció entre los sistemas bibliotecario y escolar? ¿cuál fue, en definitiva, la política bibliotecaria —es decir, en relación con la lectura pública— del régimen franquista?

En junio de 1938 Javier Lasso de la Vega, jefe del recién creado Servicio de Archivos y Bibliotecas, técnicamente formado e influido por el sistema estadounidense de bibliotecas públicas, concurría como conferenciante al Curso de Orientaciones Nacionales de Enseñanza Primaria a celebrar en Pamplona durante el mes de junio de 1938, organizado por el Servicio Nacional de Primera Enseñanza que dirigía Romualdo de Toledo. Dicho curso tenía por objetivo dar forma a los principios y directrices básicas relativas a la formación y tareas del magisterio primario. En dos charlas, bajo el título de “La biblioteca y el niño”, desgranaría la serie de medidas —técnicamente modélicas y novedosas— que después figurarían en la Orden de 8 de octubre de ese año “dictando normas y estableciendo prácticas para conseguir que los alumnos de Enseñanza Primaria se familiaricen con el uso de los libros de información general y utilización de Bibliotecas” (Lasso de la Vega, 1938).

No importa ahora que dicha Orden no tuviera efecto alguno. Pura retórica, castillos en el aire: ni existían en España bibliotecarios suficientes para llevar a cabo el despliegue de medidas y prácticas previstas, ni existen actualmente. Se trataba de un programa teórico, inviable —encontraría además la oposición del cuerpo de Inspección al que ni siquiera menciona—, dirigido, entre otras cosas, a hacer de las bibliotecas escolares lo que hoy llamaríamos un centro de recursos, convertir a los bibliotecarios en orientadores y guías pedagógicos de una enseñanza basada en el método de proyectos, con el fin de sustituir, de este modo, “desde un principio [...], con la consulta y manejo de muchos libros, el aprendizaje memorístico del libro de texto único” (Lasso de la Vega, 1942: p. XVIII).

Su discurso, con referencias a la escuela activa y a relevantes representantes estadounidenses del movimiento de la Escuela Nueva —incluso al escritor Ernest Renan, aunque de inmediato mencionara a Menéndez Pelayo— tenía necesariamente que disonar en el conjunto de intervenciones religioso-patrióticas del curso. Un discurso tan “extranjerizante” solo podía ser admitido en aquel contexto si se ponía al servicio de un nuevo concepto de la biblioteca y de los fondos bibliográficos de índole “nacionalista” basado en la “afirmación [nacional] de la unidad de destino en la historia”. Ello implicaba la sustitución de la “doctrina liberal” del “dejar hacer” por una acción estatal dirigida “a crear un tipo de hombre consecuente con este fin” nacionalizador, convirtiendo las bibliotecas en “centros de formación e instrucción del verdadero español”. ¿Cómo?:

mediante un conocimiento más fidedigno y detallado de lo que significamos en la historia universal, del valor de la ciencia española, de lo que España representa como grupo étnico, como medio geográfico, como actividad cultural, como fuerza civilizadora del Mundo, creadora de Imperios, celosa defensora de la Religión, como unidad libre en el concierto de las naciones.

(Lasso de la Vega, 1938: 9).

Y, junto a ello, limitando “la invasión desordenada de traducciones de espíritu, costumbres y sentido de la vida antiespañola(s)” (Lasso de la Vega: 1938: 9) y convirtiendo al bibliotecario en un médico-higienista y las bibliotecas en farmacias donde, como expertos y censores, tales facultativos se harían cargo de prescribir y “guiar a los lectores” asumiendo “la formidable responsabilidad social y religiosa de su cargo” (Lasso de la Vega, 1942: pp. XLIII-XLV Y XXXIX-XL).

Ya vimos como desde el Patronato de Cultura Popular, creado en 1939 en el MEN, se intentó cubrir, desde una contrapuesta concepción de la lectura y con escasa operatividad, el déficit provocado por la destrucción y depuración de la labor del PMP. No menos efectivo fue el nuevo intento de promover esta actividad en el ámbito escolar desde el Servicio Nacional de Lectura, tal y como se establecía en el Decreto de 6 de junio de 1954 que creaba el Servicio de Lectura Escolar. De hecho, se llegaría al final de la dictadura sin que fuera posible hablar de la existencia de una relación fluida entre biblioteca y escuela.

No era tanto —que también— una cuestión organizativa y de colaboración institucional entre dos servicios públicos integrados en un mismo ministerio, el de Educación Nacional, pero en direcciones generales y a cargo de cuerpos diferentes. Tampoco —que también— de incapacidad financiera y desinterés público —estatal, provincial o local— por el tema. Era, como ha precisado Martínez Martín (2015: 37-42), que el libro y la lectura constituían “una gran contradicción de la dictadura”. Dos instrumentos óptimos para conformar “verdaderos” españoles y españolas que, a la vez, eran objeto de recelos, reservas y restricciones: “si

hubo un argumento perenne en las prácticas de censura [en general y, sobre todo, escolar] fue el religioso y moral”, y si hubo “un problema” que preocupara “profundamente a todos los bibliotecarios españoles y a un buen número de lectores” fue “la selección y orientación moral de las lecturas” (Martínez Martín, 2015: 37 y 38).

Ello puede afirmarse tanto en el ámbito escolar, como se verá en el epígrafe siguiente, como en el de la política bibliotecaria si es que puede hablarse de algo, bajo la dictadura, que mereciera tal nombre. En palabras de Rodrigo Echalecu (2015: 165),

los archivos, bibliotecas y museos solo eran prioritarios en el papel que el nuevo Estado quería dar a la lectura y el libro. Éstos eran considerados como instrumento al servicio de la ideología y no un derecho universal y libre, determinando qué libros podían leerse y cuáles no.

Los fondos dedicados a las bibliotecas y la lectura fueron siempre escasos —inferiores, hasta mediados de los cincuenta, a los de la República—, no existió una planificación o sistema bibliotecario y la existencia y dotación de las bibliotecas municipales dependió siempre de la voluntad política —por lo general, inexistente— de las élites locales. En un informe, publicado en 1979, elaborado por tres prestigiosos bibliotecarios —Luis García Ejarque, Hipólito Escolar Sobrino y José Antonio Pérez Rioja—, sobre la “Situación y necesidades de los Servicios Estatales de Lectura Pública”, tras referirse a la “escasa consideración social” de las bibliotecas y del personal bibliotecario, se ofrecía una imagen “claramente desalentadora en términos macroscópicos” y “abiertamente negativa para el conjunto de la lectura pública en el ámbito municipal” (Torres Blanco, 2015: 207-208).

En suma, el Servicio Nacional de Lectura, aunque actuó dentro de las estructuras legales y administrativas creadas por la República —nunca existió una ley de bibliotecas—, lo hizo a partir de un sistema bibliotecario cercenado y expurgado, y careció tanto del impulso y la concepción de la lectura pública como derecho universal que caracterizaron al régimen republicano, como de los recursos e iniciativas públicas que lo sustentaran. La ausencia de planificación y de una política de ámbito nacional, originó fuertes diferencias provinciales y municipales. Más que en la existencia de una auténtica política bibliotecaria y del libro, concluye Torres Blanco (2015: 208), “la lectura” descansaría “sobre todo en las posibilidades de la iniciativa privada de las empresas editoriales”.

El libro escolar: del texto único (1937-1938) a la censura o autorización previa

En su fase inicial tres rasgos definen la política del libro y la edición escolar en el franquismo: en primer lugar, el control ideológico, religioso, patriótico-político y propagandístico; después, la regulación diferenciada entre las enseñanzas primaria y media y el intento fracasado de implantar el modelo de texto único.

MODELOS DE POLÍTICA DEL LIBRO ESCOLAR

Dos son los modelos extremos en relación con qué libros deben o pueden ser utilizados en el ámbito escolar: el establecimiento de un libro único de uso obligatorio —por niveles educativos y/o por disciplinas— y la libertad total de producción, comercialización, elección y uso de libros y materiales escolares. Entre ambos extremos, caben diversas modalidades. Por ejemplo, la concesión de privilegios de producción y comercialización a instituciones o editores-impresores concretos. Este modelo, habitual durante la Edad Moderna, estaría también presente en la dictadura franquista: la Iglesia católica determinaría qué libros de la obligatoria y única asignatura de Religión, la suya, deberían ser utilizados, y los órganos correspondientes de la Secretaría General del Movimiento —Frente de Juventudes y Sección Femenina— los de Formación del Espíritu Nacional, Educación Física y Enseñanzas del Hogar. Otra modalidad intermedia sería la establecida con el régimen liberal en el siglo XIX: la exigencia de una autorización administrativa, más o menos atenta a los aspectos ideológicos, morales, científicos, pedagógicos y técnicos. Una autorización o censura que implicaba la presentación previa de un ejemplar y una estricta o flexible adaptación a un programa, currículo, objetivos, contenidos y metodologías previamente establecidos con mayor o menor detalle, que podía ir acompañada de recomendaciones, concursos nacionales o, incluso, de la declaración de utilidad pública por parte del Estado de determinadas obras.

Establecido el modelo de autorización previa en la España de mediados del siglo XIX, acompañado en general de listas de obras autorizadas, este sería el sistema que, con medidas provisionales y algunos titubeos iniciales, acabaría por implantarse durante el franquismo.

Otro modelo, el más cercano al de la libertad absoluta, sin regulación o supervisión alguna, sería la ausencia de autorización previa con controles posteriores sobre su adecuación al plan de estudios o currículo establecido, así como a la legalidad administrativa, civil y penal, como cualquier otro producto impreso, en función, en este caso, de su finalidad, destinatarios y uso. Este modelo, el de

la libertad de libros de texto, como un aspecto más de la libertad de enseñanza, estuvo vigente en España, con resultados no siempre acordes con los previstos, en el llamado sexenio democrático (1868-1874), y lo está en la actualidad, con diversas exigencias relativas a la autorización previa de un proyecto editorial, desde el Real Decreto de 15 de abril de 1992, “por el que se regula la supervisión de libros de texto y otros materiales curriculares para las enseñanzas de régimen general y su uso en los Centros docentes”.

DOS INTENTOS FALLIDOS DE ESTABLECER UN TEXTO ÚNICO (1937-1938)

Cualquier intento de establecer en la enseñanza un texto único por niveles educativos, materias o actividades es, por su propia naturaleza, totalitario. Parte del supuesto de que de que el saber es algo dado y de que solo existe una mirada o punto de vista, el verdadero, sobre el mismo. Si dejamos a un lado las ya mencionadas órdenes de 4 de septiembre de 1936, promulgadas para poner en marcha el curso escolar, las dos primeras medidas sobre el libro escolar en la enseñanza primaria, adoptadas en la zona controlada por los sublevados, serían dos intentos fallidos de implantar una serie de textos únicos en distintas materias o actividades.

El primero, iniciado por Orden de 21 de septiembre de 1937, abría “un concurso para adjudicar un premio de 40.000 pesetas al autor e ilustrador de un libro de lectura [obligatorio] con destino a las Escuelas primarias, que se titulará el ‘Libro de España’”. Aunque coincidiera en el tiempo con la edición o reedición de tres libros con el mismo título, dos de ellos publicados por editoriales de sendas congregaciones religiosas, no tuvo consecuencia alguna (Diego Pérez, 1998). Quizás lo más relevante de la convocatoria sea su exposición de motivos: resume a la perfección el ideario nacionalista-católico-totalitario del bando sublevado, así como sus objetivos proselitistas y adoctrinadores. De ahí que se transcribiera parcialmente al inicio de este trabajo.

En el segundo intento, el nuevo ministro de Educación Nacional, Sainz Rodríguez, firmaría el 11 de abril de 1938 una Orden “confiriendo al Instituto de España el encargo de redactar y editar” una serie de “textos [...] con destino a la enseñanza primaria en sus distintos grados”. Once libros, todos ellos únicos y obligatorios: cuatro de Gramática y Lengua española, tres de Historia, dos de Matemáticas, uno de Ciencias de la Naturaleza y uno de Higiene y Fisiología. Solo siete llegaron a publicarse y no fueron ni únicos ni obligatorios (Diego Pérez, 2000b).

Tres razones —comerciales, pedagógicas e ideológico-políticas— impidieron llevar adelante el segundo intento de implantar textos únicos obligatorios.

La pretensión de monopolizar desde el Estado, a través del Instituto de España, el mercado editorial del libro escolar suponía la quiebra y desaparición de las

editoriales —buen número de ellas de congregaciones religiosas— que se repartían dicho mercado, además de cercenar los ingresos que obtenían por dicha actividad los autores —en su casi totalidad maestros, inspectores y profesores de Escuelas Normales— e ilustradores, por no hablar de las imprentas dedicadas a esta tarea en diversas provincias y los responsables de su comercialización. Hubo que rectificar. El 28 de junio de 1938, mientras desde el Instituto de España se ponía en marcha el proceso de producción de los once textos mencionados, se dictaba una Orden por la que, sin renunciar a la idea del texto único, se permitía que continuaran

en el mercado otros libros pedagógicos destinados a la primera enseñanza, cuya tirada en series numerosas ha obligado a las Casas productoras a invertir cuantiosas sumas, siempre que su contenido sea [...] patriótico por su doctrina y adicto por sus ideas a los nobles principios en que se inspira nuestra victoriosa revolución nacional.

A la vista del número de obras por autorizar, hubo que crear el 20 de agosto de dicho año una “Comisión dictaminadora de los libros de texto que se han de usar en las escuelas nacionales”, restableciéndose así el sistema de autorización previa.

La razón pedagógica era consecuencia de la necesidad de aprobar los programas y orientaciones metodológicas que debían regir en las escuelas del nuevo Estado. Una tarea encargada por Sáinz Rodríguez a una “comisión especial de técnicos”, por Orden de 11 de abril de 1938, el mismo día en que, en plena contradicción, encargaba también, como presidente de facto del Instituto de España, la redacción de los once textos obligatorios y únicos mencionados. Que estos programas fueran elaborados y quedaran inéditos, no oculta el hecho de que cualquiera que fuera la política del libro escolar por la que se optara, la determinación de los programas y orientaciones metodológicas era una tarea previa a la elección de los libros y materiales a utilizar.

La razón estrictamente ideológico-proselitista procedía del objetivo adoc-trinador. Algo que podía conseguirse tanto a través de un texto único como de un sistema de autorización previa, siempre y cuando se estableciera la conformidad de los libros y materiales escolares tanto con las ideologías y valores del nuevo Estado como con el sistema político dictatorial y caudillista recién instaurado. Ese era el objetivo básico de la censura, una vez se destruyeran, eliminaran y borrarán de la memoria escolar y colectiva aquellos autores y obras opuestos, o simplemente no acordes, con tales ideología, valores y sistema.

LA VUELTA AL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN PREVIA: LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE LIBROS DE TEXTO (1938-1941)

La Comisión dictaminadora, creada en principio con carácter provisional, mientras el Instituto de España llevaba a cabo las tareas que le habían sido asignadas, significó de hecho la vuelta al régimen de autorización previa. En síntesis, su labor censora denegando autorizaciones y publicando las primeras listas de obras autorizadas por el nuevo gobierno, permitió, pese a su breve existencia —fue disuelta por Orden de 8 de mayo de 1941—, “maquillar las medidas monopolizadoras de los primeros momentos y reconducir la política del libro de texto, actuando de puente hacia una estructura administrativa estable [...] que continuará con el examen de los libros de texto” (Diego Pérez, 2000a: 295-296).

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN COMO ORGANISMO CENSOR (1941-1971)

Creado por Ley de 13 de agosto de 1940, el Consejo Nacional de Educación asumiría por Orden de 13 de mayo de 1941, como órgano asesor del MEN, la tarea de emitir un dictamen sobre los libros de textos presentados, como trámite previo a su autorización o no por el ministerio. Su sección 2ª, relativa a la segunda enseñanza, desempeñó, en este sentido, “un papel determinante” predominando en ella la “valoración ideológica” sobre los “criterios [...] pedagógicos, didácticos, metodológicos” (Ceprián Nieto, 1991: 329 y 338). La 3ª, presidida por el obispo de Madrid-Alcalá, Leopoldo Eijo y Garay, a la que correspondía la enseñanza primaria, adoptó un criterio valorativo que se comenta por sí solo:

El estado actual de España no consiente confusiones doctrinales en materia fundamental educativa, ni confusiones políticas en que se dé autorizado pase a los nombres que están vinculados a la desgracia de que ha podido salvarse la patria. Las obras clásicas y fundamentales cuyo estudio, a pesar de tal cual error, puede ser de grande utilidad no deben publicarse sin notas del traductor o del editor que rectifiquen aquellos errores, y que, cual ocurrirá con frecuencia si se trata de obras extranjeras, supla con notas ampliativas el silencio que sobre glorias de España suelen caer aquellas obras.

(Ceprián Nieto, 1991: 345).

Por otra parte, desde la Vicesecretaría de Educación Popular, siguiendo los criterios manejados por dicha sección 3ª, se emitiría el 1 de diciembre de 1943

una circular que determinaba —para general conocimiento de editoriales y autores— las condiciones exigibles a los libros escolares:

- a. En los de “iniciación a la lectura y la escritura” debían figurar, “sin exclusión de ninguno de ellos”, temas “religiosos, patrióticos y del Movimiento”, y, en “la parte gráfica”, la bandera de España, las del Movimiento y los retratos “del Caudillo y de José Antonio”.
- b. La censura eclesiástica en los de “enseñanza religiosa”.
- c. En los de “ciencias geográfico-históricas y sociales”, debía ensalzarse el “sentimiento patriótico”, y realzar “la participación de España en los descubrimientos geográficos y su porvenir económico”, ajustándose “la definición de Patria al concepto actual”. Además de efectuarse una “crítica histórica” de “la leyenda negra”, el alumnado debía adquirir “una idea clara sobre España a través de los siglos”, no pudiendo “faltar la exposición” del “cristianismo, formación de la nacionalidad, reinado de los Reyes Católicos, exaltando su obra de unidad, Carlos I y Felipe II, el Imperio español [...], la evangelización de América, la labor misionera de España en el mundo, [y] el desmembramiento del Imperio como obra de la masonería”, para finalizar “con el Movimiento Nacional, principales hechos y figuras” y las “biografías del Caudillo y de José Antonio”.
- d. En los de “enseñanza del lenguaje”, se pedía que figuraran también “temas religiosos, patrióticos y del Movimiento en forma de frases, ejemplos, fragmentos de discursos, poesías, etcétera”, preferentemente de autores españoles e hispanoamericanos.
- e. En los de “ciencias naturales, al describir el origen del mundo se dará una explicación ortodoxa del mismo y se procurará hacer de esta materia un elemento de educación religiosa” (*Bibliografía Hispánica*, 1943: 84).

En cuanto al modelo de autorización previa como forma de censura, no hubo cambios sustanciales en la política del libro escolar durante la dictadura franquista. Si los hubo en los criterios pedagógico-científicos, materiales y técnicos, si bien el mayor énfasis puesto en ellos condujo, por lo general a reglamentaciones detallistas, en especial en el ámbito del currículum —contenidos y metodologías—, acompañadas de transformaciones en la primera y la segunda enseñanza que serían el origen de una nueva generación de libros escolares —ilustraciones, color, renovación de contenidos, tamaño, especialización por áreas o materias...—, así como de una mayor utilización de libros de consulta y material didáctico. Todo ello en el contexto de un fuerte incremento de la edición escolar, la desaparición de editoriales tradicionales y la aparición de otras nuevas (Viñao Frago, 2015). Por lo que respecta al tema que aquí interesa —la censura ideológico-política—, es cierto que fue amortiguándose “por el paso de los años” —menos en la enseñanza primaria que en la secundaria— “pero

nunca [estuvo] inoperante” (Puelles Benitez, 1988: 64). También lo es que, con independencia de la censura y régimen oficial de autorizaciones previas, siempre estuvo legalmente vigente el artículo XXVI del Concordato suscrito en 1953 con el Estado del Vaticano, al fin y al cabo un Estado extranjero:

En todos los centros docentes de cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la enseñanza se ajustará a los principios del Dogma y de la Moral de la Iglesia Católica.

Los Ordinarios ejercerán libremente su misión de vigilancia sobre dichos centros docentes en lo que concierne a la pureza de la Fe, las buenas costumbres y la educación religiosa.

Los Ordinarios podrán exigir que no sean permitidos o que sean retirados los libros, publicaciones y material de enseñanza contrarios al Dogma y a la Moral católica.

Un discurso y unas prácticas ultra conservadora-católicas y contradictorias

La última referencia al control eclesiástico-católico de los libros y material escolares no es baladí. Era imposible ignorar su existencia. Siempre sería una espada de Damocles que podía caer en cualquier momento sobre editores, impresores, autores, libreros y docentes. Instalado dicho control en el subconsciente, promovería la peor de las censuras: la autocensura, el no ejercicio del libre pensamiento.

El discurso eclesiástico-católico sobre la lectura y los libros estaría siempre presente en el régimen franquista. Primero, como modelo de referencia. El énfasis puesto en la determinación de las buenas y malas lecturas —buenos y malos libros y autores, buena y mala prensa—, así como la existencia de publicaciones recomendando unas y otras, y de calificaciones moral-ideológicas sobre su peligrosidad —tal y como sucedía con el cine, el teatro y todo tipo de espectáculos— serían prácticas adoptadas por la dictadura a partir de las preexistentes en el seno de la Iglesia católica. El recurso a las hogueras no carecía de antecedentes, aunque también sea cierto que estaba mucho más reciente el ejemplo de la quema de libros de mayo-junio de 1933 en la Alemania nazi. No había, en este punto, poco o nada que innovar. La adopción franquista del discurso y prácticas católicas sobre la lectura no sería una versión secularizada de estas últimas. Más bien habría que hablar de una versión ultra conservadora-católica reforzada mediante:

- a.** La presencia de miembros del estamento eclesiástico en los organismos censores o autorizadores.

- b. Los criterios utilizados: inclusión o no del libro o autor en el Índice romano de libros prohibidos, cuya última edición sería de 1948; presencia o no del *nihil obstat*; consideración amplísima del término “pornográfico”.
- c. La militancia ultra católica de los responsables máximos de los organismos que debían censurar o autorizar. Como paradigma, Gabriel Arias Salgado, Vicesecretario de Educación Popular desde 1941 a 1945 y ministro de Información y Turismo desde 1951 a 1962.
- d. La pertenencia a órdenes, congregaciones y asociaciones católicas de los autores de libros y catálogos con valoraciones sobre la peligrosidad moral-ideológica de todo tipo de publicaciones y autores.

En último término, el discurso y las prácticas del régimen franquista sobre la lectura, las bibliotecas —lecturas públicas— y el libro reflejaban una contradicción. Por un lado, había que promoverlas si se pretendía ponerlas al servicio de un adoctrinamiento determinado: más bibliotecas, campañas de promoción de la lectura, unir la red bibliotecaria y la escolar en un continuo de actividades.... Por otro, ante su posible peligrosidad moral e ideológica, había no ya que guiar las lecturas, sino vigilarlas, tutelarlas, encauzarlas en una dirección dada e imponer esta dirección, restringiendo o prohibiendo cualquier otra. Y ello, no solo en general sino, sobre todo, en el ámbito formativo y escolar. Se olvidaba que la lectura, como práctica social, solo se extiende allí donde deviene fácilmente accesible, libérrima, no controlada ni restringida y, por qué no, voluble... o sistemática.

Sería ya al final de los sesenta y comienzos de los setenta cuando las estrategias editoriales privadas, y no la política oficial del libro y la lectura, las que, ante una demanda social insatisfecha y creciente, contribuyeran a la difusión e incremento de las prácticas lectoras. La desaparición de editoriales y la reducción del número de bibliotecas existentes, durante la guerra y la posguerra, junto con la pobreza de sus recursos y actividades, nunca serían revertidas por la acción pública. Habría que esperar para ello a las dos últimas décadas del siglo pasado. Justo cuando, frente a la cultura tipográfica, a la galaxia Gutenberg, estaba emergiendo, cada vez más pujante, la electrónica e icónico-visual, la lectura en pantalla. Pero esa es otra historia.

Definición de las palabras clave

Bibliocausto/bibliocidio: acción o efecto de destruir de modo masivo y sistemático, por cualquier procedimiento, libros u otros textos e imágenes impresas.

En un sentido más amplio, las acciones o efectos de conductas, prácticas, procedimientos y dispositivos que conducen a la destrucción, desvalorización

o invisibilización de recursos de información y conocimiento, así como de los espacios físicos donde se alojan y circulan, o que atentan contra las personas que se relacionan con dichos recursos o espacios físicos.

Biblioteca escolar: lugar destinado, en un centro docente, a la conservación, catalogación y consulta de libros, impresos y recursos audiovisuales de todo tipo. Sinónimo: centro de recursos.

Censura: emisión de un dictamen o juicio acerca de una obra, autor u otra cosa con el objeto de autorizarla o prohibirla, o de valorarla con arreglo a criterios por lo general morales o ideológicos.

Expurgo: supresión de elementos considerados indeseables o perjudiciales en un texto o documento con el fin de que lo que queda sea apropiado en función de unos criterios, ideas o propósitos determinados. Sinónimos: purificación, depuración, limpieza.

Libro escolar (acepción amplia): libros y materiales impresos utilizados en la enseñanza formal. Sinónimos: libro de texto, manual escolar.

Ventana abierta

FILMES

Fahrenheit 451 de François Truffaut (1966). Existen versiones posteriores a cargo de otros directores.

LIBROS

Además de Lucien X. Polastron, *Libros en llamas. Historia interminable de la destrucción de bibliotecas*, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 2015, y Ray Bradbury, *Fahrenheit 451*, Barcelona, Debolsillo, 2016, los libros y artículos indicados en las referencias bibliográficas o en el mismo texto.

POESÍA

Bertolt Brecht, *La pira de libros*. https://www.reddit.com/r/podemos/comments/4wxj4k/la_poes%C3%ADa_como_herramienta_63_bertolt_brecht_la/

TEATRO

Jorge Gómez y María Victoria Ramos, *Bibliocastas* (2006).

SITIOS WEB



Bibliocastia. Definición, terminología asociada y conceptos de referencia: <http://bit.ly/46t6tfx>

Francesc Tur, "El Bibliocausto en la España de Franco (1936-1939)". <http://bit.ly/4nOA5tq>

Represura: disposiciones adoptadas por diversas autoridades del bando sublevado sobre censura y depuración de libros y bibliotecas, con especial atención a las escolares (julio-diciembre de 1936): Represura: DOCUMENTOS JULIO 1936.



Referencias bibliográficas

Altet Vigil, Alicia (1984). *Política del Nuevo Estado sobre el patrimonio cultural y la educación en la Guerra Civil española*, Madrid, Ministerio de Cultura.

Andrés de Blas, José (2011). "Un caso paradigmático de represión cultural: depuración de bibliotecas escolares en la provincia de Palencia durante la guerra civil española. El proceso de depuración de los fondos de las bibliotecas escolares (1ª parte)", *Represura*, 7 de febrero de 2011. En: https://www.represura.es/represura_7_febrero_2011_articulo1-parte1.pdf

Bibliografía Hispánica, 9 (noviembre-diciembre 1943), p. 84.

Ceprián Nieto, Bernardo (1991). *Del Consejo de Instrucción Pública al Consejo Escolar del Estado. Origen y evolución (1836-1936)*, Madrid, UNED.

Diego Pérez, Carmen (1998). "Los libros escolares de lectura extensiva y literaria", en Agustín Escolano Benito (dir.), *Historia ilustrada del libro escolar en España. De la posguerra a la reforma educativa*. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, pp. 225-250.

— (1999). "Intervención del primer Ministerio de Educación Nacional del franquismo sobre los libros escolares", *Revista Complutense de Educación*, 10 (2), pp. 53-71.

— (2000a). "Dictamen y dotación de libros de texto desde la guerra civil a la creación del Consejo Nacional de Educación", *Historia de la Educación*, 19, pp. 293-309.

— (2000b). "El Instituto de España: su labor en pro de los textos únicos de enseñanza primaria", en Alejandro Tiana Ferrer (ed.), *El libro escolar, reflejo de intenciones políticas e influencias pedagógicas*, Madrid, UNED, pp. 327-340.

— (2011). "Un caso paradigmático de represión cultural: depuración de bibliotecas escolares en la provincia de Palencia durante la guerra civil española (2ª parte). Las bibliotecas del Patronato de Misiones Pedagógicas en la provincia de Palencia: dotación y depuración de sus fondos", *Represura*, 7 de febrero de 2011. En: https://www.represura.es/represura_7_febrero_2011_articulo1-parte2.pdf

Dueñas Díez, Carlos de y Grimau Martínez, Lola (2004). *La represión franquista de la enseñanza en Segovia*, Valladolid, Ámbito.

Lasso de la Vega, Javier (1938). *La biblioteca y el niño*, Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1938.

— (1942). *La clasificación decimal*, San Sebastián, Editora Internacional.

- Martínez Martín, Jesús A. (2015). "Editar en tiempos de dictadura. La política del libro y las condiciones del campo editorial", en Jesús A. Martínez Martín (dir.), *Historia de la edición en España (1939-1975)*, Madrid, Marcial Pons Historia, pp. 27-42.
- Martínez Rus, Ana (2014). *La persecución del libro. Hogueras, infiernos y buenas lecturas (1936-1951)*, Gijón, Trea.
- (2021). *Libros al fuego y lecturas prohibidas*, Madrid, CSIC.
- Montilla, Francisca (1952). *La educación y su historia*, Madrid, Imprenta y Librería Casa Martín.
- (1954). Selección de libros escolares de lectura, Madrid, CSIC, Instituto "San José de Calasanz".
- Puelles Benítez, Manuel de (1998). "La política del libro escolar. Del franquismo a la restauración democrática", en Agustín Escolano Benito (dir.), *Historia ilustrada del libro escolar en España. De la posguerra a la reforma educativa*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, pp. 49-71.
- Represura*. Documentos diciembre 1936, http://www.represura.es/documentos_1936_diciembre.html#:~:text=Primera%20relaci%C3%B3n%20de%20libros
- Rodrigo Echalecu, Ana María (2015). "La política bibliotecaria de posguerra (1939-1951)", en Jesús A. Martínez Martín (dir.), *Historia de la edición en España (1939-1975)*, Madrid, Marcial Pons Historia, pp. 143-166.
- Ruiz Bautista, Eduardo (2015). "La censura editorial. Depuraciones de libros y bibliotecas", en Jesús A. Martínez Martín (dir.), *Historia de la edición en España (1939-1975)*, Madrid, Marcial Pons Historia, pp. 43-65.
- Torres Blanco, Roberto. "El Servicio Nacional de Lectura: 1952-1975", en Jesús A. Martínez Martín (dir.), *Historia de la edición en España (1939-1975)*, Madrid, Marcial Pons Historia, pp. 181-208.
- Vicéns, Juan (2002). *España viva: el pueblo a la conquista de la cultura*, Madrid, Vosa y Asociación Educación y Bibliotecas.
- Viñao Frago, Antonio (1994-95). "La modernización pedagógica española a través de la *Revista de Pedagogía* (1922-1936)", *Anales de Pedagogía*, 12-13, pp. 7-45.
- Viñao Frago, Antonio (2015). "El libro escolar", en Jesús A. Martínez Martín (dir.), *Historia de la edición en España 1939-1975*, Madrid, Marcial Pons Historia, pp. 681-698.

Normativa legal

Orden de 4 de septiembre de 1936, dictando reglas a las que habrá de sujetarse la enseñanza en los Institutos nacionales durante el próximo curso escolar (Boletín Oficial de la Junta de Defensa de 8 de septiembre de 1936).

Orden de 4 de septiembre de 1936, para la puesta en marcha del curso en las escuelas de primera enseñanza (Boletín Oficial de la Junta de Defensa de 8 de septiembre de 1936).

Orden de 23 de diciembre de 1936, declarando ilícitos el comercio y circulación de libros, periódicos, folletos y toda clase de impresos y grabados pornográficos o de literatura disolvente (BOE de 24 de diciembre de 1936).

Orden de 16 de septiembre de 1937, dictando normas sobre depuración de bibliotecas públicas (BOE de 17 de septiembre de 1937).

Orden de 21 de septiembre de 1937, abriendo un concurso para adjudicar un premio de 40.000 pesetas al autor e ilustrador de un libro de lectura con destino a las Escuelas primarias, que se titulará el «Libro de España» (BOE de 22 de septiembre de 1937).

Orden de 11 de abril de 1938, confiriendo al Instituto de España el encargo de redactar y editar los textos que se expresan con destino a la enseñanza primaria en sus distintos grados (BOE de 15 de abril de 1938).

Orden de 28 de junio de 1938, disponiendo que las Casas editoriales de libros de texto soliciten por instancia de este Ministerio la autorización para su venta, acompañando dos ejemplares de cada libro (BOE 5 de julio de 1938)

Orden de 20 de agosto de 1938, constituyendo en el Ministerio -de Educación Nacional una Comisión dictaminadora de los libros presentados por las Casas editoriales con destino a las Escuelas nacionales (BOE de 25 de agosto de 1938).

Orden de 17 de agosto de 1938, sobre depuración de bibliotecas (BOE de 21 de agosto de 1938).

Orden de 8 de octubre de 1938, dictando normas y estableciendo prácticas para conseguir que los alumnos de Enseñanza Primaria se familiaricen con el uso de los libros de información general y utilización de Bibliotecas (BOE de 16 de octubre de 1938).

Decreto de 16 de junio de 1954, por el que se crea el Servicio Nacional de Lectura Escolar (BOE de 8 de julio de 1954).

EDUCAR EN DICTADURA vs EDUCAR EN DEMOCRACIA

Monografías

Destrucción, depuración y censura de libros y bibliotecas escolares

Antonio Viñao Frago

